



Una crisis originada por la especulación en los mercados de alimentos
y por el creciente control de las grandes transnacionales

Crisis alimentaria: ¿y si habláramos en serio?

Mónica Vargas Collazos

La mejor forma de luchar contra la crisis alimentaria es modificar de arriba abajo el modelo agrícola industrial: evitar la especulación sobre los productos agrícolas, limitar la concentración empresarial en la cadena productiva... Pero lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario, pues la tendencia general se dirige hacia la profundización de este modelo y a la defensa de los intereses corporativos frente a los del conjunto de la humanidad. En el artículo también se analiza hasta qué punto muchos proyectos de 'cooperación' española son, a menudo, interferencias muy negativas sobre los supuestos beneficiarios.

Las actuales medidas tomadas por los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los países más enriquecidos frente al contexto de crisis múltiple (alimentaria, ecológica, financiera, energética) se encuentran muy lejos de ser adecuadas. De hecho, tal y como lo veremos razonando a partir del ejemplo de la crisis alimentaria, se vislumbra una incoherencia real entre la intención de resolver estas crisis y la no identificación de los responsables, así como la ausencia de participación de los principales afectados.

En primer lugar, resaltaremos la necesidad de considerar un elemento clave donde se ubican las raíces tanto de la crisis alimentaria como de la crisis ecológica global: el modelo agrícola industrial. En

un segundo momento, propondremos una problematización de lo que implica el empobrecimiento, desde la perspectiva de una compleja agresión territorial total de las regiones en los países de la Periferia. Razonaremos para ello sobre los ejemplos de algunas políticas públicas y privadas desarrolladas desde el Estado español que se sitúan en el marco de la antiooperación española. Y concluiremos con las propuestas que surgen desde los movimientos sociales en la Periferia y el Centro.

Sentando al modelo agrícola industrial en el banquillo de los acusados

El modelo agrícola industrial se basa en la producción intensiva y en la mercantilización de un derecho básico: la alimentación. En la reciente conferencia de la FAO (Roma, junio de 2008), el Director de la OMC, Pascal Lamy, volvió a insistir en que el libre comercio fortalecería la capacidad productiva de los países empobrecidos. Un mes después, en las negociaciones de la Ronda de Doha [1], cuyo objetivo

enunciado consistía en el "alivio de la pobreza", bloques económicos como EE UU y la Unión Europea propusieron una profundización de esta lógica de acceso a los mercados mundiales de bienes y servicios. En este caso, no obstante, se enfrentaron a la rotunda negativa de los países de la Periferia. En efecto, existe una conciencia creciente sobre el fracaso de las políticas de liberalización en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. De hecho, su implementación ha socavado la capacidad de los países de alimentarse a sí mismos [2].

Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de este modelo en el aumento de los precios de los alimentos? Es precisamente la liberalización de los productos agrícolas la que ha permitido dos fenómenos que son en gran parte responsables de la crisis alimentaria: la creciente especulación en el mercado de futuros de los alimentos básicos y la concentración corporativa en este sector [3]. La especulación se vincula con la creciente financiarización de la agricultura, en el contexto de la actual crisis financiera. En efecto, los especuladores

Mónica Vargas Collazos, Observatori del Deute en la Globalització <www.odg.cat>, Campaña "No te comas el Mundo" <www.noetmengiselman.org>

rehuyen el desastre financiero apostando al elevado precio de las futuras cosechas [4]. De acuerdo con la firma consultora AgResource Co., en EE UU, el mayor exportador mundial de trigo, maíz y soja, el valor de las compras de estos granos en el mercado de futuros ha representado cerca de la mitad del valor de la cosecha total [5]. Por otra parte, se estima que la cantidad de dinero especulativo en el mercado de futuros de las llamadas *commodities* aumentó de 3.172 millones de euros en el año 2000 a 111.000 millones de euros en 2007 [6].

Las políticas de libre comercio impuestas por actores como la OMC en el sector agrícola, al dismantelar los aranceles y protecciones que tenían los países empobrecidos también son responsables de la concentración empresarial en toda la cadena productiva. De hecho, tal como lo plantea Ian Angus [7], "la industria alimentaria global no está organizada para alimentar a los hambrientos, está organizada a fin de generar beneficios para el agronegocio corporativo". Y funciona: este año, el crecimiento del volumen de negocios y de las ganancias anunciado por las principales compañías que operan en la agroindustria es extraordinario. Los beneficios netos de la estadounidense Cargill en abril aumentaron un 86% frente a las cifras del año anterior, sumando 653 millones de euros [8]. Las ventas de Bunge crecieron un 70% y las de ADM un 64%.

¿Cuál es el grado de incidencia de estas empresas a las cuáles la crisis no parece afectar? Determinan lo que será producido, cómo será producido, *definen precios* y seleccionan quién producirá los alimentos. Así por ejemplo, Cargill, ADM, ConAgra, Bunge y Dreyfus dominan más del 80% del comercio mundial de cereales, mientras que Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en el sector de los agrotóxicos. En el caso específico de la soja, Bunge, ADM y Cargill controlan 75% del mercado mundial y 80% de la industria procesadora en la Unión Europea [9].

Cabe señalar también, que la promoción activa del uso de agrocombustibles en el sector del transporte, además de constituir una profundización del modelo agrícola industrial, ha sido recientemente señalada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como una causa del incremento del precio de los alimentos. Así, este organismo calcula que debido a las medidas a favor de estos carburantes, el precio del trigo se elevará, a medio plazo, en un 5%, el maíz un 7% y los aceites vegetales un 19% [10].

El modelo agrícola industrial tiene también repercusiones en otra crisis global: el cambio climático. La agricultura industrial y la deforestación que la acompaña son responsables respectivamente del 13,5% y del 18,2% de las emisiones de los gases de efecto invernadero [11]. Aquí cabe resaltar un elemento crucial: hoy en día resulta imposible pensar adecuadamente en el modelo agrícola industrial sin vincularlo con el petróleo. En todas sus fases de producción intervienen los combustibles fósiles.

En el área de los agrocombustibles nos situamos entonces ante una paradoja: se los promueve en el sector del transporte (que es responsable del 13,5% de las emisiones) como una alternativa al petróleo. No obstante, su producción, al ser a gran escala y pretender responder esencialmente a las inmensas necesidades de consumo energético en los países del Norte, implica fortalecer el modelo agrícola industrial,

generador de emisiones. Por tanto, se encuentran muy lejos de ser una solución en términos ambientales. En lo que atañe a la eficiencia, la propia OCDE destaca que en la actualidad los agrocarburantes son responsables de una reducción neta de menos del 1% en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte [10]. Ante esta realidad, en una reciente reunión de los Ministros de Energía y Medio Ambiente de la Unión Europea, se reconoció la necesidad de revisar a la baja las metas de uso de este tipo de carburantes [12].

Ante lo considerado, el sentido común nos haría esperar que en las esferas de decisión se cuestione el modelo agrícola industrial en su integralidad, se tomen medidas frente a la *financiarización* de los productos agrícolas, se ponga fin a la concentración empresarial en la cadena productiva, y se establezca una moratoria sobre los agrocombustibles, tal y como lo recomiendan



2. Cultivos de soja en la cuenca del Amazonas. FOTO: GREENPEACE.
 3. Protesta contra tres de las mayores transnacionales de la agroindustria, por su responsabilidad en la destrucción de los bosques. FOTO: RAIN FOREST ACTION NETWORK





múltiples organizaciones de la sociedad civil. Pues no, lo que ocurre es exactamente lo opuesto: la tendencia general se dirige hacia la profundización de este modelo, y la defensa de los intereses corporativos sigue sin rimar con sentido común.

Agresión territorial

Existe otro factor de disonancia en las políticas globales frente a la crisis alimentaria. Se ubica en la manera de encarar el *problema del hambre* y de cosificar a los afectados. Los seres humanos todavía no somos autómatas, ni máquinas que requieran de insumos adecuados para funcionar correctamente. El hambre no es una *plaga* que se deba combatir. La realidad de cerca de mil millones de personas en la Periferia es el empobrecimiento, es decir, un proceso creciente, generado en el contexto de las relaciones de dominación que rigen en el sistema capitalista.

Entre una gran diversidad de posibilidades, destacaremos aquí una de las maneras más frecuentes de empobrecer a una población. Se trata de las decisiones

que directa o indirectamente expulsan a esa población de su territorio, del espacio no sólo geográfico-físico sino también simbólico, donde se reproducen su estructura social y su universo cultural (incluida su manera de nombrar el mundo, es decir *su lengua*). Esto implica quitar a esta población toda posibilidad de determinar cómo se quiere organizar social, política, cultural y ecológicamente. Se trata también, por ejemplo, de impedirle escoger y producir los alimentos y materiales destinados a su subsistencia, de recurrir a sus propios conocimientos para curar a sus enfermos y de decidir sobre la fuente de energía que quiere usar.

Este tipo de agresión multisectorial es la que cotidianamente tiene lugar en las poblaciones de la Periferia y empeora sus condiciones de vida. Tiene su origen en políticas públicas y privadas desplegadas desde los países del Centro, en colaboración con elites locales, y esa sí es una *plaga* que se debe detener [13]. Por tanto, no nos encontramos ante un problema que pueda ser resuelto con ayuda alimentaria o

comida en latas. En otros términos, los 500 millones de euros prometidos este año por el Presidente Zapatero en ayuda a la cooperación para programas de seguridad alimentaria, o los 760 millones que el Banco Mundial desbloqueará con la misma intención, no representan nada frente a los daños que causan en la Periferia.

Anticooperación española en América Latina

Es por ello, que en el análisis de este proceso es de gran utilidad el paradigma de la *anticooperación* [14], desarrollado recientemente por David Llistar, y que permite contrastar las políticas de ayuda al desarrollo con la arquitectura de las relaciones de poder a nivel global. De acuerdo con la propuesta de Llistar, este paradigma se sustenta en tres hipótesis centrales: en primer lugar, los contextos en los que viven los habitantes de la Periferia dependen, en gran medida, de decisiones y actitudes de los habitantes del Centro; en segundo lugar, la cooperación al desarrollo constituye una contribución cuyo grado es muy inferior frente a las interferencias negativas generadas en la Periferia por los países del Centro; y finalmente, la mayoría de estas consecuencias negativas son producidas a partir de la lógica de empresas y Estados que aspiran a crecer y asegurarse recursos y mercados. La anticooperación Centro/Periferia es, por tanto, el conjunto de interferencias negativas generadas desde los países económicamente más poderosos sobre los más empobrecidos [15].

Es a partir de ese enfoque que brindaremos aquí un ejemplo de una de las áreas donde se ejerce la anticooperación desde el Estado español. Se trata únicamente de una ilustración de lo que desde las autoridades españolas se podría *dejar de hacer*, en caso de que se optara por luchar contra el empobrecimiento. Consideraremos brevemente dos casos de anticooperación relacionada con la agresión territorial y los agrocombustibles, en el ámbito público y desde la esfera privada.

Entre las peores agresiones que implican la expulsión de las poblaciones locales de sus territorios y que pesan hoy en día sobre el continente americano amenazando con incrementar el empobrecimiento se encuentran el Plan Puebla Panamá (PPP) –hoy Plan Mesoamérica– [16] y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA). Se trata de planes sobre los cuales existe ya una amplia literatura [17] por lo que únicamente resaltaremos dos aspectos: la participación del Gobierno y del capital español y la potenciación del modelo agrícola industrial mediante el desarrollo

de los agrocombustibles. En el diseño de ambos planes ha participado, sin ninguna consulta a las poblaciones locales, una de las principales entidades generadoras de deuda del continente, y de la cual el Estado español es miembro: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Si consideramos primeramente el PPP, vemos que entre las entidades que lo promueven activamente se encuentran también instancias públicas españolas, tales como el Instituto Español de Comercio Exterior, y el Instituto de Crédito Oficial de España (ICO). Ambos participan en el Grupo Técnico Interinstitucional del PPP, uno de los pilares de la estructura del Plan [18]. Además, cabe resaltar que el Gobierno español participa directamente en el BID desde 1976 [19].

Ahora bien, en lo que refiere a la producción de agrocarburos en América Latina, el Banco tiene un papel determinante. Su presidente, Luis Alberto Moreno, co-dirige un grupo del sector privado, la Comisión Interamericana del Etanol, conjuntamente con Jeb Bush (ex-gobernador del Estado de Florida) y el ex-primero ministro japonés Junichiro Kozumi. Las zonas donde el BID ha apoyado la expansión de los monocultivos energéticos (caña de azúcar y palma aceitera) en el marco de Plan Puebla Panamá, han registrado violaciones de los derechos humanos y alarmantes desplazamientos de las poblaciones. Tal es el caso de las comunidades afrodescendientes en Colombia [20] y más recientemente, de comunidades indígenas en Guatemala. En este último país, es al BID a quién se dirige la organización internacional Rights Action para protestar por la financiación de monocultivos que no hacen sino causar hambre, represión y deforestación [21].

Los lazos del Gobierno español con el BID se estrecharon en 2008 mediante la firma de cartas de intención por un valor de 12 millones de euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), destinados a la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático y a la creación del Fondo Español de Empresariado Social [22]. La mitad de los 12 millones será destinada a la Iniciativa sobre Energía Sostenible y Cambio Climático del BID que apoya a los países de América Latina y el Caribe en los ámbitos de energía renovable y eficiencia energética, desarrollo de agrocombustibles y adaptación al cambio climático. Los 6 millones restantes irán servirán para la creación del Fondo Español de Empresariado Social, gestionado por el Fondo Multilateral de Inversiones, que proporcionará recursos a microempresarios y pequeños productores latinoamericanos mediante

actividades productivas y de provisión de servicios básicos.

Cabe destacar que esta participación del Gobierno español entra en el marco de la anticooperación ambiental, al menos por dos razones: en primer lugar, la promoción de los agrocombustibles, cuyos impactos sociales y ambientales ya son reconocidos por una diversidad de actores [23] y en segundo lugar por la participación en los proyectos de “adaptación al cambio climático”. De manera creciente, se denuncia desde las organizaciones sociales latinoamericanas a las políticas de adaptación como “nuevas formas de dominación y control de nuestros recursos y economías” [24].

El BID promueve también los agrocombustibles en América del Sur. En 2007 el Directorio Ejecutivo del BID aprobó la primera financiación al sector privado para un proyecto de producción de este tipo de carburantes en Brasil por un total de 120 millones de dólares, concretamente para Usina Moema Açucar e Alcohol Ltda. (Sao Paulo). Esta operación forma parte de una iniciativa del banco para la promoción de la estructuración de financiamiento de deuda prioritaria para cinco proyectos de bioetanol que tendrán un costo de 997 millones de dólares [25].

Por otra parte, se establece un vínculo fuerte entre los agrocombustibles e IIRSA. En efecto, importa asegurar un fluido vaciado de los *commodities* (como la soja, la caña de azúcar y la palma aceitera) hacia los puertos, no únicamente atlánticos, sino también del Pacífico, de cara a los mercados asiáticos. Así, el BID recomienda a Brasil gastar en infraestructuras 1.000 millones de dólares por año durante 15 años. Aspira también a acelerar proyectos del IIRSA rechazados por la sociedad civil, como por ejemplo la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, el proyecto de navegabilidad del Río Meta, Ferro Norte, y el Complejo del Río Madera.

En IIRSA se activa la anticooperación española, pero esta vez vinculada al capital privado. Se observa la presencia de constructoras españolas en estos megaproyectos (por ejemplo ACS-Dragados), y de consultoras como Typsa y Norcontrol, pero nos concentraremos aquí en la responsabilidad del Banco Santander Central Hispano (BSCH) en uno de los proyectos más social y ambientalmente agresivos de IIRSA: el Complejo Hidroeléctrico del Río Madera.

El Complejo proyecta la construcción de una hidrovía de 4.200 km de largo que haría posible la navegación de grandes

1 y 2. La ayuda alimentaria no compensa ni de lejos la pobreza que crean el resto de políticas de los países del Centro. FOTOS: EC/ECHO
3. Comisión Ejecutiva del Plan Puebla Panamá.
4. Pintada contra el Plan Puebla Panamá.





1

1. Protesta por la soberanía alimentaria ante La Bolsa de Madrid. FOTO: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

2 y 3. Es necesario reconducir la producción agrícola hacia la autosuficiencia alimentaria de los pueblos.



2



3

embarcaciones en los Ríos Madera, Madre de Dios y Beni, así como la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en la amazonía brasileño-boliviana. El BSCH ha ganado, junto al banco portugués BANIF, la subasta de una de las represas, Santo Antonio. Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto numerosos factores que van a entorpecer sin duda la viabilidad socioambiental del Complejo.

Entre los graves impactos sociales y ambientales que implica la implementación de estas megainfraestructuras, podemos citar que las represas ponen en peligro una

de las zonas de más importante biodiversidad de América del Sur. Además, implican la inundación de territorios indígenas y campesinos, y por tanto el desplazamiento de 10.000 personas en el lado brasileño. En el lado boliviano, se estima que 1.400 familias serán afectadas por la construcción de las represas. En su mayoría se trata de comunidades indígenas Chácobo, Tacana, Esse Eija, Cavineñas, Machineri, Joaquinianas, Toromonas, Yaminahua e integrantes de un pueblo indígena no contactado, el pueblo Pacahuara. De manera general, impactará sobre la pesca, que permite la

supervivencia de 2.4000 pescadores en ambos lados de la frontera.

Preocupa también que la zona afectada potencialmente por las represas sea una de las áreas con más enfermedades como la malaria y el dengue en la región amazónica. La inundación y el consecuente estancamiento de las aguas posibilitará el aumento considerable de estas enfermedades [26]. Se establece en este caso un vínculo importante con los agrocombustibles, puesto que las hidroeléctricas abastecerán de energía a los Estados brasileños de Rondonia y Matto Grosso, permitiendo la extensión de la producción sojera de por sí muy importante en este último Estado, gobernado por Blairo Maggi, uno de los más grandes productores de soja del planeta [27]. La responsabilidad del BSCH en este caso ha llevado a una red de organizaciones de la sociedad civil a denunciarlo ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (Lima, mayo de 2008) [28].

El repaso de la participación española pública y privada en los megaproyectos de infraestructuras potenciados por el auge de los agrocombustibles no ha tenido otro objeto que resaltar algunos ejemplos de áreas donde se podría actuar para detener el empobrecimiento. Hemos querido subrayar también la necesidad de partir de una perspectiva integral a la hora de considerar el problema de la pobreza.

Hacia la soberanía alimentaria y el decrecimiento

Si en las esferas de decisión, además de identificar claramente las contradicciones inherentes a la crisis alimentaria, se cediera un espacio para la escucha de los principales afectados, la situación sería muy distinta. En la Cumbre de la FAO del mes de junio, por ejemplo, agrupadas en un evento paralelo, organizaciones de campesinos y pequeños productores (es decir, el 80% de la población que sufre de hambre) denunciaron el poder de la agroindustria y de la liberalización de la agricultura. Su respuesta fue diametralmente opuesta a la de la Cumbre: no piden *seguridad* sino *soberanía* alimentaria; se oponen a los agrocombustibles a gran escala y piden que los gobiernos se concentren en la producción sostenible de alimentos en pequeña escala [29]. Apuntan la complejidad de la agresión neoliberal de la que son objeto y que rebasa los vacíos discursos de la Cumbre.


El modelo agrícola industrial implica la apropiación y el saqueo de la tierra, un recurso estratégico. Y para ello, se aplica una *descampesinización* feroz [30], particularmente en los países empobrecidos. Pero ellos ya no hablan de *expulsión*, hablan de

desterritorialización. Porque lo que pierden, ante la presión de los agronegocios por extender monocultivos de palma aceitera, soja, jatrofa, maíz o caña de azúcar en millones de hectáreas, es su territorio, es decir su cultura, su vida y por tanto, su dignidad. Es ante esta corrosión de sus ancestrales sistemas agrícolas, alimentarios, políticos y culturales que reivindican la soberanía alimentaria.

Cabe destacar también que en los países del Centro actualmente cobra cada vez más fuerza un lema aglutinador de una gran diversidad de ideas de cambio: el decrecimiento, entendido como “la necesi-

dad de salir del modelo económico actual y romper con la lógica del crecimiento continuo” [31]. Surge esencialmente del pensamiento de Nicholas Georgescu-Roegen, el cual desarrolló la bioeconomía, entendida como la formulación de una ciencia económica, ecológica y socialmente sostenible, que aspira a resituarse a la economía como un subsistema de la biosfera, en el respeto de las leyes y límites físicos de ésta última.

En torno a esta noción se desarrollan, por ejemplo, propuestas particularmente urgentes en los países del Centro tales como: la producción a escala local y

sostenible, la agricultura agroecológica, la desindustrialización, el fin del actual modelo de transporte, el fin del consumismo y de la publicidad, la desurbanización, la autoproducción de bienes y servicios, la austeridad, los intercambios no mercantilizados. Es a partir de este tipo de iniciativas, y en un esfuerzo de empatía, escucha y colaboración entre las diferentes resistencias al sistema capitalista que podremos encarar de manera responsable los actuales problemas globales y recuperar la posibilidad de una vida digna para todos los pobladores del planeta. Es decir, podremos hablar en serio. 

Notas y referencias

1. La Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha (Qatar), en noviembre de 2001, estableció el mandato para negociaciones relativas a la agricultura y los servicios (véase: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm).
2. KUCHARZ, T. (2008): “La OMC no es la solución, sino el problema”, *Público*, Tribuna de Opinión, 1-8-2008.
3. Para una exhaustiva explicación de este fenómeno véase: GARCÍA, F., RIVERA-FERRE, M. Y ORTEGA M. (2008): *Precios en aumento. Cuando los árboles no dejan ver el bosque*, Barcelona, www.attacmadrid.org/d/9/080511133844_php/F1.pdf
4. Prueba de la gravedad de la crisis financiera, las entidades bancarias más afectadas por la crisis financiera han reconocido pérdidas de cerca de 250.000 millones de euros, a la vez que el FMI considera que paliar a la situación actual costaría cerca de 610.000 millones de euros (RAMONET, I. (2008): “Las tres crisis”, *Le Monde Diplomatique*, edición en castellano, 153, julio). Ramonet señala asimismo que la financiarización no sólo afecta a la agricultura sino también al petróleo, al desplazarse grandes cantidades de dinero del sector inmobiliario a la especulación por el alza del precio del petróleo.
5. WILSON, J. 2008. “Wall Street Grain Hoarding Brings Farmers, Consumers Near Ruin”, *Bloomberg*, 28-4-2008
6. GRAIN (2008): *El negocio de matar el hambre*, abril <http://www.grain.org/articulos?id=40>
7. ANGUS, I. (2008): “Capitalismo, agronegocio, y la alternativa de la soberanía alimentaria: La crisis alimentaria”, *Rebelión*, 18-5-2008 <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67568>
8. CARGILL. 2008. “Cargill reports third-quarter fiscal 2008 earnings”, Comunicado 14-4-2008 http://www.cargill.com/news/news_releases/080414_earnings.htm
9. GARCÍA, F., RIVERA-FERRE, M. Y ORTEGA M. (2008), op.cit; y RIBEIRO, S. (2008): “El hambre de los agronegocios”, *La Jornada*, 18-5-2008
10. De acuerdo con la OCDE, el coste de estas políticas públicas representará además 16.000 millones de euros anuales en 2015 en EE UU, Canadá y la Unión Europea (EFE, (2008): “La OCDE certifica que los biocarburantes encarecen los alimentos y contribuyen poco a frenar el CO₂”, *El País*, 16-7-2008).
11. WORLD RESOURCES INSTITUTE. 2008. *World Greenhouse Gas Emissions Flow Chart*, Abril (<http://www.wri.org/chart/world-greenhouse-gas-emissions-flow-chart>)
12. *La Jornada*, (2008), “UE frena a los biocombustibles”, 31-7-2008
13. Un matiz: las realidades locales siempre son complejas y pensarlas implica un examen de caso en caso, a partir de las contradicciones históricas internas. No obstante, aquí nos concentramos en las tendencias generales.
14. LLISTAR, D. (2008): “La anticooperación: los problemas del Sur no se resuelven con ayuda internacional”, *Revista Pueblos*, 4-1-2008 (<http://www.revistapueblos.org/spip.php?article730>). El artículo citado constituye un avance de la monografía del mismo autor, *Anticooperación*, que será publicado próximamente.
15. De acuerdo con Llistar, la anticooperación se ejerce en las siguientes esferas: tecno-productiva, financiera, comercial, militar, diplomática, migratoria, ambiental, simbólica o ideológica y *solidaria* (Llistar, D. (2008), op.cit).
16. Desde el 27 de junio de 2008, el PPP fue sustituido formalmente por el “Plan Mesoamérica” reestructurando algunos de los proyectos. (ver *Desde Guatemala*. 2008. “Proyecto Mesoamérica sustituye al Plan Puebla Panamá”, 9-7-2008, <http://desdeguate.blogspot.com/2008/07/proyecto-mesoamerica-sustituye-al-plan.html>). Sin embargo, puesto que la gran mayoría de los proyectos de PPP no han sido desmantelados, mantendremos en este apartado esa denominación.
17. Para más información sobre el carácter geoestratégico de ambos planes y sus impactos sociales y ambientales, véase: http://www.odg.cat/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=582
18. Si bien no lo desarrollamos en este artículo, cabe señalar que la participación del Gobierno y de las empresas españolas en el área energética del PPP es crucial.
19. El PPP cuenta además con la participación de entidades como la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
20. Véase ROSAS LANDA, O. (2007): “Palma aceitera en Colombia. ¿Paramilitarismo sustentable?”, en: *Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas*, 54, octubre.
21. Re-UITA (2008): “Guatemala: Deforestación y desplazamientos por agrocombustibles”, 1-8-2008 (<http://www.rel-uita.org/>)
22. Véase: *El Economista*. 2008. “Economía/Finanzas.- España aportará 12,7 millones al Banco Interamericano de Desarrollo”, 27-6-2008; y Medio Ambiente On Line. 2008. “España y BID firman cartas de intención por US\$20 millones para Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático y creación de Fondo Español de Empresariado Social”, 9-4-2008. http://www.medioambienteonline.com/site/root/resources/industry_news/5936.html
23. Véase por ejemplo: http://www.odg.cat/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=578; Biofuelwatch, Carbon Trade Watch/TNI, Corporate Observatory, & Other. (2007) *Agrofuels. Towards a reality check in nine key areas.* (http://www.tni.org/detail_pub.phtml?know_id=188); GRAIN, Redes-AT, (2007), *Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas*, 54, octubre; *Censat Agua-Viva* (2008), *Agrocombustibles. Llenando tanques, vaciando territorios*, Bogotá.
24. Véase OILWATCH, (2008), *Documento de posición sobre la adaptación al cambio climático*, en: http://www.oilwatch.org/index.php?option=com_content&task=view&id=600&Itemid=48&lang=
25. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2007): “BID aprueba US\$120 millones para proyecto de biocombustibles en Brasil”, Comunicado de Prensa del 25-7-2008.
26. A escala local, se hace cada vez más visible una oposición popular al Complejo Hidroeléctrico. Para más información, véase: www.finanzaseticas.org y VARGAS, M., DUCH, G. Y MAESO, V. 2008 “BSCCH en la Amazonía: financiamiento social y ambientalmente irresponsable”, *La Directa*, julio.
27. Para más información: <http://www.biceca.org> y <http://internationalrivers.org/>
28. Véase: www.enlazandoalternativas.org
29. Véase: “Políticas vacías para platos vacíos”, (www.viacampesina.org)
30. Véase los casos de Colombia, Paraguay, Brasil, Malasia e Indonesia por ejemplo en Redes-AT y GRAIN. 2007b. “La fiebre por los biocombustibles y sus impactos negativos”. *Revista Biodiversidad: Sustento y Culturas*, 52, pp. 16-20
31. MOSANGINI, G. (2007): “Decrecimiento y cooperación internacional”. *Rebelión*, 29-9-2007.